

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y POLÍTICA NACIONAL Y POPULAR: LA ARGENTINA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

LUIS ALBERTO ROMERO

Luis Alberto Romero es Investigador del CONICET con sede en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité directivo del sitio historiapolitica.com

Resumen

En la primera mitad del siglo XX la sociedad argentina se caracterizó por su carácter democrático: crecimiento, integración, movilidad y un estilo fuertemente igualitario. Sus conflictos se relacionaron con la rápida incorporación y con la puja corporativa en torno del Estado. Los acompañó una inestabilidad identitaria, que derivó en un nacionalismo sustantivo. Sobre estos rasgos, la cultura política reunió la dimensión popular y la nacionalista con la valoración del Estado en la regulación de los conflictos. Estas ideas se esbozan en 1916 con el radicalismo yrigoyenista, se desarrollan luego de manera compleja y quebrada y plasman en 1945 con el peronismo, para instalarse sólidamente desde entonces en la cultura política.

Summary

In the first half of the twentieth century Argentine society was characterized by its democratic nature: growth, integration, mobility and a strongly egalitarian style. Their conflicts were related to the rapid incorporation and corporate struggle around the State. They had been accompanied by an instable identity, which led to a substantive nationalism. On these terms, the political culture combined the popular nationalist dimension with the assessment of the State in regulating conflicts. These ideas are outlined in 1916 by the radicalism of Yrigoyen, then developed in complex ways and broken and reflected in 1945 by Peronism, to settle solidly since then in the political culture.

Con Darío Macor compartíamos el gusto por los relatos de la historia argentina. Combinábamos la parte que cada uno conocía directamente con lo mucho que aportan otros colegas e intentábamos explicaciones generales, entre la síntesis y el ensayo. No iban muy bien con los cánones actuales de la investigación académica, pero creíamos que eran útiles, y sobre todo, satisfacían nuestras dos pasiones: la Historia y el compromiso ciudadano.

A los dos nos interesó mucho el tema de la democracia en la Argentina. Yo me acerqué a la cuestión en 1982, a partir de una idea de Leandro Gutiérrez sobre los «nidos de la democracia», tan errada como fructífera. Después di varias vueltas al problema de la coexistencia de una sociedad fuertemente democrática y una política democrática insatisfactoria, particularmente en la primera mitad del siglo XX. Con la mirada de 1983, me parecía una contradicción en los términos. Luego, con una mirada menos optimista de nuestro reciente desempeño democrático, seguí dando vueltas a la idea. Fui agregando otras cuestiones –sobre todo la del Estado y las corporaciones– y afinando el razonamiento. En estas vueltas de tuerca, junto con la síntesis de algunas cuestiones sobre las que ya escribí bastante, voy a sumar aquí consideraciones nuevas, referidas a la sociedad y sus experiencias, la cultura y las ideologías. Incluyo así una pieza a este recorrido que, de un modo u otro, concluye en el peronismo.

Caracterizaré primero la sociedad democrática en el largo siglo que va de 1860 a 1960, y en particular el asociacionismo y su relación con los cambios políticos iniciados con la ley Sáenz Peña. Luego consideraré las formas características de los conflictos de esta sociedad: la puja corporativa y los choques provenientes de la incorporación, y su relación con las características del Estado y de la cultura política. Luego consideraré el problema de la inestabilidad identitaria de esta sociedad móvil y abierta, y su relación con un rasgo fuerte de la cultura política: el nacionalismo. Finalmente examinaré brevemente la manera compleja y quebrada con que estos rasgos se incorporan a la vida política, y cómo cuajan en el primer peronismo, para quedar, desde entonces, sólidamente instalados en nuestra tradición¹.

¹ He intentado este tipo de síntesis en varios trabajos: *La larga crisis argentina. Del siglo XX al siglo XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013; *Breve historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 3a edición ampliada, 2012; *Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004; «Democracia, república y estado. Cien años de experiencia política en la Argentina», en: Roberto Russell (ed.), *Argentina, 1910-2010. Un balance del siglo*, Buenos Aires, Taurus, 2010.

LA LEY SÁENZ PEÑA: PROPÓSITOS Y EFECTOS

En el comienzo de la moderna política democrática de masas está la ley Sáenz Peña de 1912. Por entonces, las instituciones republicanas estaban razonablemente consolidadas y los gobernantes surgían de elecciones con sufragio universal masculino optativo, con escasos votantes y fortísima intervención de los gobiernos electores. Desde 1890 apareció un fuerte reclamo ético, común en la nueva política democrática de la época, que agregó la preocupación por la deficiente selección de dirigentes que generaba un sistema político cerrado y manipulado, así como las inquietudes por el escaso compromiso de las masas de nuevos argentinos venidos con la inmigración. De esas dos inquietudes surgió en el círculo conocido como reformista la idea de ampliar el universo de ciudadanos sufragantes, convirtiendo al sufragio en obligatorio. El carácter de secreto, y el uso de las listas del empadronamiento militar, lo hacían también creíble. A eso, los reformistas agregaron el sistema de lista incompleta, para estimular la formación de partidos que compitieran y que, en su perspectiva, habrían de reflejar las dos o tres grandes corrientes de ideas del país. Suponían que se impondría un partido que integrara las personalidades notables con las estructuras políticas existentes. Pero desde 1912 la UCR comenzó a tomar ventaja y en 1916 se eligió presidente a Yrigoyen.

En lo inmediato, los efectos de la nueva ley fueron matizados. Pocos extranjeros se naturalizaron, y así quedaron al margen de las elecciones. Los nuevos votantes se sumaron de a poco, y sólo en la elección de 1928 se alcanzó un nivel de participación que desde entonces ha oscilado entre el 70 y el 80% del padrón. El radicalismo se nutrió de gente nueva, especialmente en la parte modernizada del país, y también de fragmentos enteros de los viejos aparatos políticos. Pero a la vez, comenzaron a jugar nuevos elementos, como el discurso interpelador y su definición del destinatario, así como la maquinaria política y los elementos rituales y míticos de una política que, como en todo el mundo, incorporaba por entonces esos elementos². En 1916 comenzó el primer ciclo democrático argentino, que se prolongó hasta 1955. Aunque sin duda pueden señalarse fuertes diferencias dentro del período, en conjunto puede pensarse en una experiencia democrática homogénea, sobre todo por comparación con la posterior a 1955. Entre Yrigoyen y Perón cobró forma una política democrática escasamente republicana,

² Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio, «Introducción», en: Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio (eds.), *Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

sustentada en movimientos populares plebiscitarios de líder, que desarrollaron políticas de interés social.

La democracia moderna se funda en un principio básico, tan contundente como abstracto: la legitimidad del gobernante surge de la expresión de la voluntad del pueblo. De este principio han surgido distintas familias, con parecidos y diferencias, con intercambios y evoluciones. De manera esquemática, puede distinguirse inicialmente una que combina la democracia con el liberalismo y las instituciones republicanas y otra que acentúa la voluntad ilimitada del pueblo, expresada en quien encarna lo que Max Weber llamó hacia 1920 el liderazgo carismático de masas. Esta segunda manera de entender la democracia fue muy popular desde fines del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Recoge un clima de época, antiliberal y antiparlamentario, e incorpora nuevos mecanismos para responder a la ampliación en la participación política. Junto con las grandes organizaciones partidarias o máquinas, se generalizaron formas rituales, mecanismos identitarios que apelaban a lo mítico, lo ritual y lo simbólico. Fue el gran tema de Ostrogorski y Weber, de Michels, Sorel, Mosca y Pareto, y el que fundamentó la popularidad de Le Bon.

Para calificar a esta familia suele hablarse de populismo, un término que vincula aquellas experiencias con otras actuales, muy diversas. Es un concepto que, como cualquier otro, puede ser una herramienta muy útil y una trampa para quienes quieren entender realidades concretas. Vale la pena distinguir dos cuestiones que en los casos históricos a los que se aplica no siempre vienen juntas. Por un lado, el sujeto legitimante a quien se dirige el discurso: el pueblo nacional. Por otro, un cierto tipo de políticas consistente en intercambiar recursos y beneficios —de los que el gobierno puede disponer con libertad— por apoyo político, dado en el comicio o en la plaza. En este terreno, el uso de populismo es habitualmente denostativo, y engloba políticas y circunstancias muy diferentes, aunque excluye a regímenes que, interpelando al sujeto nacional y popular, preferían dedicar los recursos a construir la grandeza del Estado, como lo recuerda la conocida alternativa de Mussolini sobre panes o cañones. En cualquier caso, regímenes políticos con estas características no son simplemente la concreción de una categoría atemporal. Hay procesos específicos por los cuales estas maneras de entender la política arraigan y coagulan, de una manera singular y única. Por ejemplo, en la Argentina de la primera mitad del siglo XX.

UNA SOCIEDAD IGUALITARIA Y ASOCIATIVA

A lo largo de los cien años que van de 1860 al fin de la década de 1960 la sociedad argentina se caracterizó por su carácter democrático y por la fuerza de su movimiento asociativo. La singularidad se destaca por comparación con cualquier otra sociedad latinoamericana contemporánea, con la obvia excepción del Uruguay. Una afirmación de este tipo –muy panorámica, y a la vez muy influida por la experiencia negativa de las últimas décadas– descarta aspectos que para otros análisis son fundamentales, como los ciclos económicos de alzas y bajas, así como las percepciones de los protagonistas, dominadas por otras preocupaciones.

En esos cien años la capacidad de la sociedad para incorporar nuevos contingentes fue enorme. En una larga primera etapa fueron los migrantes europeos, que se incorporaron a un país escasamente ocupado. Se instalaron principalmente en la zona litoral, profundizando las diferencias, ya existentes, entre el nuevo país moderno y el más tradicional del interior. Desde 1930 hubo muchos migrantes de las áreas rurales a las urbanas y de las zonas tradicionales a las modernas. Desde los años sesenta se aceleró la migración de los países limítrofes, que dura hasta hoy.

Durante mucho tiempo, hubo empleo para los migrantes, que ocuparon las posiciones abiertas por una economía en expansión, basada en el agro primero y en la industria o los servicios después. Hasta la década de 1960, y siempre con una mirada general, el desempleo no fue un problema estructural. El trabajo fue uno de los grandes mecanismos de incorporación de los recién llegados. El otro fue la educación, a través de un sistema notable por su magnitud y calidad, organizado por el Estado argentino en las últimas décadas del siglo XIX y que se expandió hasta mediados del siglo XX, o un poco más. Fue una gran inversión, que permitió a los niños y jóvenes capacitarse para progresar, y le permitió al Estado convertirlos en argentinos y en ciudadanos.

Empleo y educación fueron los dos grandes promotores de la movilidad social, que se manifestó de manera contundente entre dos generaciones: es raro que los hijos no estuvieran en mejor situación que los padres, al menos en alguno de los ejes con los que usualmente esto se aprecia. Los lugares que dejaban quienes ascendían eran rápidamente ocupados por los recién llegados, de modo que una pirámide social, que detuviera la imagen en algún momento, no dejaba de ser eso, una pirámide. Lo singular no está principalmente en la amplitud de quienes en algún momento ocupan el medio, sino en la continuidad y falta de cortes tajantes –lo

que incluye a las elites, más abiertas de lo que usualmente se supone— y en el largo proceso de movilidad, en el que se constituyeron las célebres «clases medias».

Ciertamente, el progreso individual y familiar requirió un cierto tipo de actitudes hacia el trabajo y el ahorro, así como la valoración de la educación, pero estas carreras del ascenso no fueron considerados resultados singulares, atribuidos a un esfuerzo especial, sino el resultado natural y esperable de una vida regular. Así se combinaron los resultados empíricamente observables con la formación de lo que José Luis Romero llamó «la ideología espontánea de la movilidad social»³. Ciertamente, hubo infinidad de inmigrantes que fracasaron y se volvieron, y otros muchos que no salieron de la pobreza y cayeron en la marginalidad, pero por muy significativas que estas historias sean, no alcanzaron a modificar esta percepción espontánea y generalizada, que sólo empezó a vacilar en la década de 1960.

En suma, lo que se conformó fue una sociedad que, a diferencia de cualquiera de sus vecinas, no era estamental ni estaba cruzada por diferencias étnicas definidas⁴. Una sociedad que Tocqueville y sus lectores habrían llamado democrática, subrayando no sólo su movilidad sino también su carácter igualitario: nadie era más que nadie. Más abajo retomamos este tema. Otra vez, no es la única percepción —hay períodos y hay zonas en los que la deferencia tradicional perdura— pero es la que finalmente se impuso.

La segunda gran característica de la nueva sociedad es el vigor del asociacionismo voluntario. Esta característica, propia de cualquier sociedad que se aleja de la comunidad, según la célebre formulación de Tönnies, se expandió ampliamente en las zonas modernas del país, y también llegó, de manera atenuada, al país tradicional. Su forma fue cambiando a medida que cambiaban las demandas, y las asociaciones pasaron de ser genéricas y multifuncionales, a específicas y diferenciadas. Las más vigorosas inicialmente fueron las de base étnica —por ejemplo los nativos de Lalín, un pequeño pueblo de Galicia, o más genéricamente los irlandeses o italianos—, pero a medida que avanzó el proceso de integración crecieron las asociaciones de

³ José Luis Romero, *Latinoamérica. Las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1976 (varias reediciones).

⁴ Intenté una comparación entre Buenos Aires y Santiago de Chile en «Entre el conflicto y la integración: los sectores populares en Buenos Aires y Santiago de Chile a principios del siglo XX», en: Alicia Hernández Chávez, Marcello Carmagnani y Ruggiero Romano (coords.), *Para una historia de América. III. Los nudos (2)*, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1999.

base territorial, como las sociedades de fomento barriales, que estudiamos con Leandro Gutiérrez⁵.

Quienes participaron de las sociedades de fomento, las bibliotecas populares, las cooperativas agrarias o las impulsadas por las parroquias católicas, por ejemplo, adquirieron una serie de capacidades y desarrollaron actitudes significativas: manejarse en un grupo, exponer, escuchar, proponer, acordar y construir una voluntad colectiva, avalada por quienes no participaban activamente. A eso se le sumó la capacidad de gestionar ante las autoridades, responsables de resolver los problemas edilicios –empedrado, vigilancia, y otros– que constituían el primer motor. Esta experiencia, sedimentada en la actitud y el valor de construir un actor colectivo que demande al gobierno, encontró un amplio campo de desarrollo con la ampliación política iniciada con la ley Sáenz Peña.

Inicialmente la ampliación política no cambió mucho a la elite dirigente de los partidos, pero generó un conjunto de comités partidarios de base, y ofreció a quienes ya tenían experiencia en el ámbito de las asociaciones un nuevo terreno para aprovechar sus habilidades y abrir un camino nuevo en el ascenso social. Desde el punto de vista de los partidos «modernos», se ha subrayado la importancia de la «máquina» electoral, con reglas viejas y nuevas. Esa máquina se nutrió de muchos cuadros formados en la experiencia societaria, con sus capacidades y también con una cierta idea de la relación entre sus demandas y las posibilidades del Estado para satisfacerlas.

Luciano de Privitellio mostró cómo en Buenos Aires, en las décadas de 1920 y 1930, se estableció la relación entre lo político y lo barrial, entre vecinos y ciudadanos. Juntos constatamos que la explicación seguía siendo importante en el momento de los orígenes del peronismo⁶. Posteriormente, los sindicatos ocuparon

⁵ Leandro H. Gutiérrez y Luis Alberto Romero, *Sectores populares, política y cultura: Buenos Aires en la entreguerra*, Buenos Aires, Sudamericana, 1995; 2da edición, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

⁶ Luciano de Privitellio, *Vecinos y ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003; Luis Alberto Romero, «La política en los barrios y en el centro: parroquias, bibliotecas populares y politización antes del peronismo», en: Francis Korn y Luis Alberto Romero (eds.) *Buenos Aires/Entreguerras. La callada transformación, 1914-1945*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 2006; Luciano de Privitellio y Luis Alberto Romero, «Organizaciones de la sociedad civil, tradiciones cívicas y cultura política democrática: el caso de Buenos Aires, 1912-1976», *Revista del Departamento de Historia*, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Nº 1, Año I, fines de 2004.

una parte del espacio, pero lo territorial nunca dejó de pesar en la construcción política. En cuanto a las ideas y la cultura, aquello de «todos juntos, para mejorar las cosas» pudo nutrirse tanto de las ideas de tradición liberal o socialista progresista como de las provenientes del mundo católico más tradicional. Ambas construyeron un campo en el que la idea de colaboración y demanda al Estado fue más fuerte que la de la confrontación entre actores sociales con intereses contradictorios.

LOS CONFLICTOS, LAS CORPORACIONES Y EL ESTADO

¿Qué forma tuvieron los conflictos en esta sociedad móvil y democrática? Las formas que por entonces eran más comunes en Europa, que enfrentaban a los sindicatos y partidos obreros –la «clase obrera»– con los patronos ocuparon un lugar menor en la Argentina. Su importancia fue mayor entre el fin del siglo XIX y el comienzo del XX, cuando el mundo de los trabajadores se fragmentaba en una pluralidad de sindicatos y organizaciones políticas. En 1900, la huelga general contra los patronos y el Estado, y en general toda la táctica anarquista, que Juan Suriano denominó «militancia de urgencia», fueron las más eficaces para movilizarlos, y para provocar la reacción represiva del Estado, acompañada por activistas violentos de las clases patronales. Entre 1917 y 1922 se desarrolló lo más parecido a un conflicto entre patronos y obreros, admirablemente estudiado por María Ester Rapalo. Organizaciones sindicales bien estructuradas golpearon en los puntos estratégicos de la economía –los puertos, el transporte marítimo y el ferroviario– con demandas que formaban parte del repertorio de cuestiones negociables. El gobierno de Yrigoyen emprendió tímidamente el camino hacia la neutralidad y el arbitraje, abandonado en enero de 1919, mientras los patronos se organizaron, convocados por la Asociación del Trabajo, empeñada en imbuirlos de conciencia de clase, y por la Liga Patriótica, que cubrió el frente ideológico y también la acción de choque. Los años entre 1916 y 1922, influidos por la guerra y la oleada revolucionaria mundial, fueron notables. Pero no se repitieron⁷.

⁷ Juan Suriano, *Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910*, Buenos Aires, Manantial, 2001; María Ester Rapalo, *Patrones y obreros. La ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011.

Por entonces, había importantes sindicatos con organización estable y algún tipo de reconocimiento y capacidad para dialogar con las autoridades y, probablemente, las patronales. Junto con la Federación Obrera Marítima o la Unión Ferroviaria surgió la Federación Agraria Argentina, que canalizó el reclamo de los chacareros de 1912. Tras de ellos, se fue desarrollando un sostenido movimiento de asociaciones defensoras de intereses específicos, grandes, medianos y pequeños. Nadie ignoró que la clave de la negociación de los conflictos pasaba por la organización y el reclamo persistente de metas concretas. La línea de las clases se hizo más difusa en este mundo de intereses diversos. Si el enemigo de clase se desdibujaba, cada vez se hizo más claro que la clave de la cuestión estaba en la intervención del Estado, y del gobierno que lo administraba. A medida que avanzó en su construcción, el Estado fue asumiendo su función de establecer reglas en distintos ámbitos de la sociedad, que significaban frecuentemente dirimir conflictos entre distintas partes. ¿Qué diferenciaba, en términos legales a un médico de un curandero? ¿Y al médico del farmacéutico? En cada caso, y en un proceso que se desarrolló a lo largo del siglo XX, el Estado debió resolver innumerables problemas de incumbencias, presionado por asociaciones de intereses, hasta llegar, por ejemplo, a los podólogos. En cada solución, el Estado debía conceder una franquicia, una autorización dada a unos y negada a otros⁸.

Así, en una sociedad donde la movilidad erosionaba permanentemente las identidades de clase, pero reforzaba las profesionales, el Estado se ubicó en el centro de esa compleja madeja. ¿Cuál era el propósito estatal específico? Es muy difícil encontrar una respuesta general válida, pues más allá de la construcción estatal, que eventualmente mantuvo una cierta línea, los gobiernos imprimieron cada uno su propia orientación. En cada caso, la intención del Estado se movió entre tres polos: el interés general, el sectorial y el político. El primero se refiere a la educación y la salud, o a reglamentar el ejercicio legal de la medicina. En una banda intermedia se encuentran los beneficios sectoriales que eventualmente apuntan a un interés general, como una protección arancelaria. Por allí se pasa gradualmente al segundo: la concesión de una franquicia o prebenda a un interés

⁸ Luis Alberto Romero, «El Estado y las corporaciones, 1920-1976», en: Roberto Di Stefano, Hilda Sabato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno, *De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990*. Buenos Aires, Gadis, 2002.

singular, corporativo o personal. El tercero se refiere a los intereses electorales o políticos de quien ocasionalmente gobierna el Estado.

Algunos ejemplos ilustran sobre la diversidad de situaciones, así como la tendencia general. Desde la constitución del Estado federal, las provincias menos favorecidas obtuvieron del Estado la deriva de subsidios de distinto tipo, y lo hacen hasta hoy. El caso más espectacular es el de la producción azucarera tucumana, que dio lugar a la formación del primer lobby formal: el Centro Azucarero. En la etapa inicial de la conflictividad social, el Estado dividió su acción entre la represión policial o militar y la búsqueda de mecanismos de integración, como el proyectado Código del Trabajo de 1904. El gobierno de Yrigoyen, el primero estrictamente dependiente de los votos, avanzó –sin éxito– en el arbitraje personal de los conflictos laborales, y a la vez apuntó con precisión a las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, se ocupó de los sindicatos porteños y del precio del azúcar, y se desentendió del lobby azucarero y de los sindicatos al otro lado del Riachuelo⁹. Alvear disfrutó de un período de calma social, pero hizo un aporte singular: el laudo azucarero, una transacción entre los enmarañados intereses tucumanos, que se le pidió a título personal y no como presidente.

Fue un precedente en el nuevo papel del Estado en los conflictos de intereses, que se expandió en la década de 1930, con las Juntas Reguladoras –de la carne, la yerba, el algodón, entre otras–, que comenzaron por precisar cuáles eran los intereses que en cada caso debían ser convocados, distinguir quienes tenían algo que decir y estar representados. Eran juntas asesoras, pues las decisiones pasaron por el Congreso; allí se aprobó el Tratado de Londres, negociado por el gobierno, que benefició a los hacendados y a los frigoríficos, considerados el pilar de la economía del país. Fue un beneficio que podía argumentarse en términos del interés general, aunque Lisandro de la Torre y los socialistas no lo creyeron así. La intervención estatal más fuerte consistió en el establecimiento del Banco Central y de todo el instrumental para regular las grandes variables de la economía, usados en adelante para políticas de diferente signo, pero todas decisivas para los intereses¹⁰.

⁹ David Rock, *El radicalismo argentino (1890-1930)*, Buenos Aires, Amorrortu, 1975.

¹⁰ Ana Virginia Persello, «Partidos políticos y corporaciones: las juntas reguladoras de la producción, 1930-1943», en: *Boletín del Instituto «Dr. Emilio Ravignani»*, n° 29, Buenos Aires, enero-junio de 2006; Tulio Halperin Donghi, *La República imposible (1930-1945)*, Biblioteca del Pensamiento Argentino, Buenos Aires, Ariel, 2004.

En 1945, bajo el impulso de Perón, el gobierno militar resolvió uno de los grandes problemas pendientes: la institucionalización del conflicto en el mundo industrial, mediante el reconocimiento de los sindicatos y el establecimiento de las reglas de negociación entre los sindicatos, los empresarios y el Estado. Este reglamento llegó con una franquicia que resultó fundamental en la historia posterior: el establecimiento del sindicato nacional único por rama de industria, que fundó la corporación sindical.

Con Perón el Estado no sólo promovió las reformas vinculadas con la justicia social sino que intervino directamente en las negociaciones sobre salarios y empleo –la defensa de las fuentes de trabajo–, en las que se centró la acción sindical. Del mismo modo, reguló la distribución de la renta agraria y estimuló al sector manufacturero con protección, cambio diferencial y créditos. El gobierno de Perón avanzó fuertemente por el camino de coordinar los intereses y los conflictos de los distintos sectores, e impulsó, con distinto éxito, la formación de las respectivas organizaciones corporativas. Pero a la vez, los sindicatos –pieza clave de esta estructuración– fueron colocados en puestos del Estado y participaron de los consejos económicos, la diplomacia y otras esferas de decisión, además de tener vínculos muy estrechos con el ministerio de Trabajo. Esa participación fue el primer ejemplo notorio –los anteriores, como el de la Sociedad Rural en el ministerio de Agricultura, no sorprendían– de instalación de una corporación de intereses en el área estatal encargada de controlarlo. Comenzaba a dibujarse el proceso de colonización de Estado, desplegado después de 1955.

Así el Estado adquirió un papel muy importante en el reparto del ingreso y en la regulación de la puja distributiva. Un aspecto de ese papel era su capacidad para dar a unos lo que no se les daba a otros. La capacidad estatal de dar, de conceder, voluntariamente o no tanto, constituye una de las dimensiones incluidas en el concepto de populismo, habitualmente asociado con el peronismo. Si dar y conceder es una característica casi constitutiva de un Estado y de sus gobernantes, las preguntas más específicas se refieren a quién, cuándo y para qué. Lo primero tiene que ver generalmente con demandantes con peso político –como las provincias en un Estado federal–, sectorial –generalmente corporativo– o electoral, y con los proyectos de quienes gobiernan. Cuánto se da se asocia con los ciclos económicos, y la capacidad del Estado para disponer de excedentes que pueden ser repartidos. El para qué remite a las opciones clásicas de la economía política: consumo e inversión, consumo inmediato y consumo diferido, o como decía P. Samuelson, retomando la fórmula de Goering, cañones o manteca.

En 1946 el peronismo dispuso de abundantes recursos, acumulados durante la guerra y ampliados en los primeros años de la posguerra, y optó por repartirlos ampliamente, incentivando el consumo, en especial el de los trabajadores y los sectores populares. Aunque no faltaron inversiones estatales significativas, fue la fiesta del corto plazo. No todos los gobiernos habitualmente considerados como populistas hicieron lo mismo. Quizás Goering y el nazismo no deban ser mencionados, pero Mussolini sí. Él formuló la misma alternativa en Piazza Venezia; ante el pueblo aplaudió la opción por los *cannone*, en lugar de los *pane*. Mussolini, que escribió en sus *Diarios* «Un pueblo debe ser pobre para poder ser orgulloso», privilegiaba la grandeza nacional y la construcción de un imperio —la inversión—, que suministraría una gratificación simbólica para el pueblo, a cambio de la escasez de pan. De modo que Perón hizo una elección, como lo mostró en un trabajo seminal Juan José Llach¹¹. Esa elección, tomada en una coyuntura excepcional, plasmó un modelo ideal de sociedad y de Estado que, desde entonces, se convirtió en un referente ineludible.

CONFLICTOS DE INCORPORACIÓN

Otro aspecto, más singular, de la conflictividad social en la primera mitad del siglo XX se origina en el proceso mismo de movilidad e incorporación: los efectos de la llegada de nuevos contingentes que reclaman su lugar. Carecen de la dramaticidad de los grandes conflictos sociales, como los de la primera posguerra o de los años setenta, y también de las «efectividades conducentes» de los conflictos corporativos. No fueron irresolubles ni particularmente graves en sí, pero constituyeron experiencias que dejaron una huella importante en las identidades colectivas y en la forma de procesar la conflictividad en términos políticos.

En un cierto sentido, el largo proceso de incorporación y movilidad social argentina —y sobre todo de sus partes modernas— tuvo una dimensión virtuosa, ya mencionada: la extensión de la educación, la mejora en la posición de los protagonistas. Pero en algunos momentos, la aceleración de esa movilidad, y sobre todo su percepción inmediata y directa, generaron un tipo especial de conflictos.

¹¹ Juan José Llach, «El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo», en: *Desarrollo Económico*, vol. 23, n° 92, enero-marzo de 1984.

Así ocurrió a principios del siglo XX, en los momentos de acelerada inmigración, cuando Buenos Aires evocó a una Babel cacofónica, y emergieron entre los intelectuales y la élite política respuestas autoritarias y xenófobas. En los años peronistas hubo una ruptura similar.

Desde principios del siglo XX nuevos contingentes se incorporaron al disfrute de la vivienda propia o al recreo dominical; iban al fútbol, frecuentaban el teatro y paseaban por el «centro», leían diarios, revistas y libros; colecciones populares ponían a su alcance lo mejor de la cultura universal¹². En suma, se fueron apropiando de diferentes bienes que en épocas anteriores podían marcar distinciones sociales.

Este proceso se aceleró en la década peronista. Recuerdo dos imágenes muy incisivas. Tulio Halperin Donghi habló de una revolución social, que podía percibir cualquiera que viajara en tranvía. Juan Carlos Torre subrayó la velocidad de la incorporación, su tono desafiante y la «alegre euforia y estridente vulgaridad» de los recién llegados. Coincidiendo con las migraciones internas, el crecimiento del empleo industrial y la expansión de los conurbanos, mucha gente se incorporó de manera acelerada al consumo, a la ciudad y a la política, desarrollando espontáneamente una de las dimensiones de la ciudadanía social que simultáneamente se promovía desde el gobierno. Aumentó el consumo de ropa y calzado, de radios y heladeras, y al final, de las motonetas Siam que promocionó Perón. Se generalizó el «sábado inglés», y los fines de semana se llenaron las canchas de fútbol, las plazas y los cines. Comenzó el turismo social, y como apunta Torre, en Mar del Plata los nuevos veraneantes ocuparon la playa Bristol, desplazando a Playa Grande a los más tradicionales¹³.

¹² José Luis Romero, «Buenos Aires, una historia» (1971), en: *La ciudad occidental*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009; Oscar A. Troncoso, «Las nuevas formas del ocio», en: José Luis Romero y Luis Alberto Romero (dirs.), *Buenos Aires: historia de cuatro siglos*, 2ª edición ampliada, Buenos Aires, Altamira, 2000; Julio Frydenberg, *Historia social del fútbol. Del amateurismo a la profesionalización*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013; Carolina González Velasco, *Gente de teatro. Ocio y espectáculo en la Buenos Aires de los años veinte*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012; Adolfo Prieto, *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, 2ª edición de Siglo XXI, 2006; Beatriz Sarlo, *El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulación periódica en la Argentina*, Buenos Aires, Catálogos, 1985, 2ª edición de Siglo XXI, 2011; Luis Alberto Romero, «Los libros baratos y la cultura de los sectores populares», en Leandro Gutiérrez, y Luis Alberto Romero, *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*, op. cit.

¹³ Tulio Halperin Donghi, *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1994; Juan Carlos Torre, «Transformaciones de la sociedad argentina», en: Roberto Russell (ed.), op. cit.

Ninguna de estas experiencias fue profundamente dramática, pero con seguridad fueron conflictivas. Por ejemplo: quienes son habitués de una plaza y acostumbran a usar un banco, deben admitir que una familia se siente y los obligue a correrse. Quizás además griten, o coman, o escuchen música, o simplemente se muevan. Es posible que quien estaba cómodamente instalado, aunque no tenga ninguna razón valedera para oponerse, reflexione sobre la inoportunidad de los recién llegados, su falta de urbanidad, su grosería o su «estridente vulgaridad», y hasta es posible que se vaya indignado, pensando que el lugar ha sido estropeado. Los recién llegados, por su parte, se molestarán inicialmente por el cómodo desparramo de quien ya estaba, reclamarán su derecho, y harán uso del lugar con la «alegre euforia» de ejercer sus derechos.

Podemos trasladar esta experiencia a cualquier otro escenario, y agregarle otros elementos, como la manera de vestirse. Experiencias repetidas se decantan en juicios valorativos: para unos, existe una minoría ilegítima, una oligarquía, que usurpaba el disfrute de los bienes. Para otros, hay un populacho grosero, que no sabe usarlos. Estas percepciones, vinculadas con la democratización social y desarrolladas en un contexto político e ideológico al que haré referencia luego, decantan en un conflicto cultural que, me parece, está en lo profundo de la experiencia peronista, que contrapuso «lo popular» con «lo decente» o «lo educado». El conflicto se caracterizó por imágenes sociales contrapuestas, que incluían caracterizaciones del otro: la «oligarquía» egoísta y «el pueblo» sano y virtuoso. «Los descamisados», en su sentido peyorativo, o como el polo positivo de una sociedad escindida. La misma confrontación se encuentra en la figura de Evita¹⁴.

La palabra populismo se usa, entre otras cosas, para denominar un discurso sobre la política y sus actores muy antiguo, que remonta al menos al siglo XIX. Contrapone una minoría privilegiada, que ha usurpado el gobierno para apropiarse de la fortuna de otros, y un pueblo que aspira a llegar al poder para recuperar sus derechos y restablecer la igualdad. La versión argentina del populismo es inseparable de estas experiencias sociales y culturales que, aunque son previas, caracterizaron los años peronistas. En ella el pueblo no se asocia con el proletariado, que construye una sociedad y una cultura nuevas, sino con el que accede al disfrute de lo ya construido. En los libros de lectura del peronismo, el obrero aparece en su casa, sentado en un sillón, con saco y corbata, leyendo el diario.

¹⁴ Julie E. Taylor, *Eva Perón. Los mitos de una mujer*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1981.

Una imagen que expresa la aspiración a la incorporación concretada. Pero a la vez, profundizando el sentimiento democratizador, hay un cuestionamiento profundo de lo que quedaba de la deferencia o subordinación a la antigua elite, integrada por los sectores altos o, sobre todo, por las clases medias más tradicionales, las que primero se hicieron un lugar, y sienten más directamente el asalto a sus posiciones. El cuestionamiento a la oligarquía y al privilegio arraigó en la sociedad argentina, junto con el peronismo, y afectó la legitimidad de cualquier grupo aspirante a ejercer algún tipo de dirección colectiva.

INESTABILIDAD IDENTITARIA Y NACIONALISMO

Ahora enfocaré la cuestión desde otro lado: la inestabilidad identitaria que fue parte de esta sociedad de gente en movimiento, de recién venidos, y su derivado: el nacionalismo esencialista.

Junto con la incorporación e integración, hubo desconcierto ante la variedad de gentes y los cambios de las posiciones relativas, y también preguntas angustiadas. La primera se refiere a quién es quién: quienes son estas personas de lenguas y costumbres extrañas, o quiénes son los que ahora vienen a la plaza. Típica pregunta de la Babel de principios de siglo, y también común luego del 17 de octubre de 1945. A continuación viene otra más esencial y conflictiva: ¿quiénes somos nosotros, los argentinos? ¿Cómo reunir en un colectivo que nos identifique a habitantes e incluso ciudadanos tan diversos? En los términos de la época, la pregunta se refirió al «ser nacional», y está presente, especialmente entre los intelectuales, desde fines del siglo XIX hasta el fin de este largo ciclo que estamos siguiendo¹⁵.

Muchos han registrado las reacciones generadas por estas preguntas, como la afirmación de algún rasgo esencial que defendía los privilegios de los más antiguos y descalificaba a los recién llegados. Es posible encontrarlo en las estampas de *Fray Mocho*, o en el criollismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de gran popularidad. También ha sido estudiado el caso de las elites tradicionales: hicieron valer su condición patricia, cultivaron el desprecio al extranjero y la xenofobia en la literatura y el ensayo, y promovieron organizaciones defensivas, como la Liga Patriótica o medidas políticas, como la Ley de Residencia. Pero de todo esto no resultó una confrontación

¹⁵ Lilia Ana Bertoni, *Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

entre nativos y extranjeros, en parte porque ninguna expresión de xenofobia alteró la convicción de fondo de que el progreso argentino estaba indisolublemente unido con la inmigración masiva y en parte porque los inmigrantes que estaban dispuestos a persistir y afincarse en su nuevo destino, aunque no adoptaran la nueva nacionalidad, se preocuparon mucho por ganarse la credencial de argentinos¹⁶.

Los inmigrantes se reunieron con sus connacionales y crearon sus mutuales, asociaciones y hospitales, pero a la vez ellos o sus hijos pusieron mucho interés en asimilarse a las prácticas, valores y mitos que suponían nacionales. Adolfo Prieto estudió los «centros criollistas» que florecieron en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX, unos 270 en 1914. Los frecuentaban jóvenes empleados de la administración o el comercio, artesanos y obreros, que se reunían para bailar o cantar, con indumentarias típicas y acompañados por el mate o el asado. A la hora de bautizarlos, solían recurrir a Santos Vega, prócer del criollismo, o a lemas como «Gloria, patria y tradición», o «La tradición nacional». Lo notable —constata Prieto— es que entre los socios y dirigentes hay un número considerable de apellidos extranjeros o de sus hijos, como lo era José Betinotti, el payador por excelencia. Señala Prieto la importancia de esta combinación entre sociabilidad y creencias en la formación de un cierto sentimiento de nacionalidad o pertenencia, útil en aquellas décadas tanto para sobrevivir a la confusión cosmopolita —no era necesario ser criollo para asombrarse de las costumbres de un «turco»— como a los brotes de xenofobia¹⁷.

Un eco de este entusiasmo de los inmigrantes o sus hijos por lo nacional se encuentra en un comentario de Victoria Ocampo, quien «como integrante de una familia acostumbrada desde hace mucho tiempo a ser argentina, no puede excitarse tanto por serlo como algunos compatriotas que recientemente le han llegado de ultramar y que no han vacilado en reprocharle su falta de entusiasmo para lo que para ellos es una fascinante novedad»¹⁸.

Muchas otras experiencias sociales incluyeron en las décadas posteriores la dimensión de la argentinidad en sus discursos y rituales: así ocurrió en el movi-

¹⁶ Tulio Halperin Donghi, «¿Para qué la inmigración? Ideología y política inmigratoria en la Argentina (1810-1914)», en: *El espejo de la historia*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

¹⁷ Adolfo Prieto, *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.

¹⁸ La paráfrasis de la frase de V. Ocampo corresponde a T. Halperin Donghi y remite a un diálogo con Eduardo Mallea (Victoria Ocampo, *Diálogo con Mallea* [1969]). Tulio Halperin Donghi, «Eduardo Mallea», en: Carlos Altamirano (ed.), *La Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Ariel, 1999.

miento obrero, donde el sindicalismo se nutrió de una perspectiva nacional, o en las conferencias barriales propiciadas por el partido Socialista, interesado, desde Juan B. Justo, en filiar sus ideas en una cierta tradición nacional, al igual que los comunistas. También en el teatro, muy popular por entonces; el radioteatro —«Chispazos de tradición» sumaba a sus emisiones radiales las giras por los pueblos—; la radio, con sus cadenas nacionales; el fútbol o las carreras de Turismo Carretera, cuyas transmisiones radiales contribuyeron a crear tanto identificaciones nacionales como un imaginario del territorio argentino¹⁹.

Pero sobre todo, hay un componente político. Nacionalizar a las masas fue, tempranamente, un problema del Estado, quien lo hizo, *velis nolis*, a través de la escuela y del servicio militar obligatorio. El Estado aportó lo suyo, con su presencia y sus símbolos, por ejemplo a través de YPF, asociado con el Automóvil Club Argentino²⁰. Las grandes políticas estatales —como las del peronismo— llevaron a la nación, junto con el Estado, a todos los rincones, y lo mismo hicieron los partidos políticos, que con sus símbolos y sus líderes crearon otros motivos identificatorios comunes.

En suma, el «ser nacional» pudo construirse a través de diversos caminos. Pero por esos canales no cruzó un único significado de la nacionalidad. Por el contrario, definir la argentinidad constituyó uno de los motivos de querrela más fuerte de la cultura política de esta sociedad. A diferencia por ejemplo de Chile, donde la idea de nación emanó con naturalidad del Estado y de las elites, sin convertirse en motivo de confrontaciones²¹, o de Brasil, donde las querellas político ideológicas no excedieron el reducido ámbito de las elites, en una sociedad como la argentina, modernizada, democrática, igualitaria y con fuertes inseguridades acerca de quién es quién, definir la identidad se convirtió en el preciado botín de quienes, al disputarse su paternidad, pujaban por la llave para definir el campo político.

Eso ayuda a entender la intensidad de las querellas de los intelectuales, muy activos desde principios del siglo XX —Manuel Gálvez, Ricardo Rojas, José Octavio

¹⁹ Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, «La democratización del bienestar», en: Juan Carlos Torre (dir.), *Los años peronistas (1943-1955)*, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

²⁰ Anahí Ballent y Adrián Gorelik, «País urbano o país rural: la modernización territorial y su crisis», en: Alejandro Cattaruzza (dir.), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.

²¹ Luis Alberto Romero, Luciano de Privitellio, Silvina Quintero e Hilda Sabato, *La Argentina en la escuela. La idea de nación en los libros de texto*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

Bunge, Joaquín V. González o Leopoldo Lugones—, quienes disputaron sobre el hispanismo, el criollismo, el indigenismo, las razas o el lenguaje, iniciando un debate que en los treinta prolongaron Ezequiel Martínez Estrada, Raúl Scalabrini Ortiz, Eduardo Mallea o Aníbal Ponce, y que en los sesenta y setenta retomaron Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche o Rodolfo Puiggrós. Todavía hay quien se entretiene con estos temas²².

Lo importante ocurrió cuando sus argumentos se cruzaron con los de actores con fuerte capacidad de enunciación y de interpelación. Uno de ellos fue el Ejército, que se asumió como custodio final de los valores de la Nación, por encima de las instituciones de la República, y que identificó a la nación con su territorio, esencialmente argentino desde algún momento, suficientemente remoto, como para que los pueblos aborígenes, sin saberlo, ya llevaran la marca de su argentinidad. Satisficían así uno de los requisitos de la concepción romántica de la nacionalidad: su origen más allá de la historia y de sus contingencias. Al centrarla en el territorio, eludían otras querellas y resaltaban su tarea de defenderlo. Lo «nacional» y lo «no nacional», que era potencialmente peligroso o claramente enemigo, se definieron por las fronteras territoriales, que nos separaban de vecinos acechantes y voraces, antes de que su cruce con el anticomunismo de la segunda posguerra precisara la idea de la «frontera interior», ideológica, e incorporara a su relato la noción del argentino cosmopolita, cipayo, traidor y, finalmente, apátrida.

El segundo gran actor fue la Iglesia católica, que desde principios del siglo XX, a medida que avanzaba en su organización institucional, se hizo cargo de la idea del Papado según la cual la misión de la Iglesia era reconstruir la sociedad cristiana. Aludía a un pasado cristiano imaginado, erosionado por la modernidad y la secularización, y a un renovado esfuerzo por instalar a Cristo en todas las cosas. La Iglesia argentina, nutrida de inmigrantes, como cualquier otra institución del país, se esforzó en identificarse con la nación desde sus orígenes —un sacerdote habría estado presente en cada instancia importante de su historia—, y a la vez en puntualizar que la nación argentina fue siempre esencialmente católica. No proponían una nación intolerante —o no mucho—, pero sí radicalmente católica. Aquí

²² José Luis Romero, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1965; Lilia Ana Bertoni, *Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX*, op. cit.

chocó con la letra y el espíritu de la Constitución —que había invitado a «todos los hombres de buena voluntad», sin más precisiones— y asumió el desafío, proponiendo su reforma y, transitoriamente, el establecimiento de la enseñanza católica en la «escuela sin Dios». Este catolicismo militante logró en las décadas de 1930 y 1940 hacerse ver y disputó por la calle. Sobre esta crítica a la tradición liberal, los intelectuales católicos pudieron empalmar naturalmente con los nacionalistas, y ambos elementos se potenciaron cuando la confrontación ideológica del mundo llegó al país: «Viva Cristo Rey» y «Viva Hitler» solían mezclarse en las manifestaciones de los jóvenes de 1940. En la vereda de enfrente quedaban los protestantes, los judíos, los masones, los liberales, los socialistas y, por supuesto, los comunistas²³.

El tercer gran enunciador fueron los movimientos políticos de base popular, el radicalismo yrigoyenista primero y el peronismo después, que como ya se señaló, se identificaron con la nación. Tuvieron desigual intensidad, distinto respeto por el marco constitucional liberal, y diferente uso de los instrumentos estatales. Pero en la médula de su discurso, yrigoyenismo y peronismo fueron la nación, y sus adversarios políticos cayeron en el único campo posible en estos términos: los enemigos de la nación.

Hasta aquí la clasificación. En los hechos, estos elementos —más allá de la consistencia institucional de algunos— se mezclaron y se proyectaron de diferentes maneras. En algunos momentos, el tradicionalismo expresó las ideas de la elite y de quienes se identificaban con ella, como ocurrió en la Liga Patriótica, o en combinaciones menos activas pero más preocupadas por los símbolos. La asociación entre la iglesia de la Nación Católica y las fuerzas armadas, que estudió Loris Zanatta, tuvo una eficacia notable. Cada uno potenció al otro, dándole consistencia y efectividad a la idea de la doble regeneración, nacional y cristiana, por obra de la espada y la cruz. Anunció su presencia en 1930, llegó a su cenit en 1943 y se mantuvo activa hasta el gobierno militar de 1976²⁴.

La combinación que hemos querido rastrear fue la que asoció una cultura política popular con una cierta idea de nacionalidad, cuyo centro era político pero integraba, a su manera, lo militar y lo católico. El cruce de lo nacional y lo popular

²³ Luis Alberto Romero, «El ejército de *Cristo Rey*. Movilización católica en Buenos Aires, 1934-1945», en: *Cuadernos de Historia*, n° 32, Universidad de Chile, Santiago, marzo de 2010.

²⁴ Loris Zanatta, *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996; y *Perón y el mito de la nación católica*, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

es un fenómeno que floreció en el mundo a fines del siglo XIX, creció hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y puede encontrarse hoy en muchas partes. Es lo que habitualmente se designa como populismo. En la Argentina –como en cualquier otra parte– ese cruce se dio de una manera específica, combinando elementos políticos y discursivos con dos experiencias sociales de las que vengo hablando: los conflictos de incorporación y los de identidad, que me parece explican el éxito de la fórmula peronista, cuando es propuesta en 1945. Sobre ella, se construyó el Estado peronista, que recogió otra dimensión de esta sociedad: la confluencia de los intereses corporativos en torno del Estado.

LA POLÍTICA: DE YRIGOYEN A PERÓN

Veamos finalmente cómo se manifestaron estas cuestiones en el ciclo político democrático que inaugura la ley Sáenz Peña y que –desde el punto de vista que he planteado– se cierra con la Revolución Libertadora en 1955.

Yrigoyen fue una cabal expresión de la emergente política democrática de masas. Su legitimación electoral fue contundente, aunque en el discurso yrigoyenista a menudo se hace referencia a otra expresión del pueblo, previa y real, ratificada por los comicios, que cubriría la dimensión formal. Hay un plebiscito implícito, que confiere a Yrigoyen la misión nuclear de su programa: la regeneración. Por ese camino, la propaganda yrigoyenista construyó progresivamente la imagen romántica del iluminado, el santón, el Jesús potente, expulsando a los mercaderes del templo, que son variaciones sobre la idea del liderazgo carismático²⁵.

El plebiscito le confiere un poder que excede el asignado por la Constitución, y lo coloca por encima de los otros poderes, especialmente del Legislativo, donde nunca pudo contar con una mayoría completa. Hacer leer su discurso inaugural de las sesiones anuales por un secretario, negarse a las interpelaciones ministeriales o intervenir provincias durante los recesos fueron recursos con los que transitó por el borde mismo de la institucionalidad republicana, sin transgredirla²⁶.

²⁵ Marcelo Padoán, *Jesús, el templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad yrigoyenista*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2002.

²⁶ Ana María Mustapic, «Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical, 1916-1922», en: *Desarrollo Económico*, vol. 24, n° 93, abril-junio de 1984; Ana Virginia Persello, *Historia del radicalismo*, Buenos Aires, Edhasa, 2007.

En sus palabras, todo eso formaba parte de la «causa radical», que era la «causa nacional», opuesta al «régimen falaz y descreído», una variante de «el pueblo y sus enemigos» que, junto con la exaltación de su figura, fue central en su práctica política. Pero junto con ella, fueron esenciales otros dos mecanismos, que formaban parte de la política tradicional: el entretejido de relaciones personales con dirigentes y cuadros partidarios —una tarea de la que no queda registro, salvo que le dedicaba muchísimo tiempo y obtenía excelentes resultados— y el armado de un partido con gran capacidad para ganar elecciones, combinando los sufragios puros con otros obtenidos con mecanismos tan antiguos como el apoyo de los comisarios. En suma: líder, discurso nacional y popular y máquina. Una combinación no muy diferente de la de Gladstone en la Inglaterra de 1870.

En cuanto a las políticas, como a Gladstone, le atrajeron los temas generales, de amplia convocación y escasos compromisos concretos, como la regeneración, el neutralismo o el petróleo. Se ha señalado un «interés social», una preocupación por distintos aspectos de la cuestión social, traducido en proyectos de ley que el Congreso ignoraba y sobre los que el presidente no insistió. Paralelamente, hubo intervenciones personales en cuestiones críticas, como las huelgas, o el aumento de precios en la posguerra, que revelan a la vez su prestigio personal y el mínimo o inexistente desarrollo de agencias estatales para sustentarlas. Por otro lado, en estas intervenciones primaron las consideraciones electorales, sobre todo en el caso de la Capital Federal, un distrito donde siempre le resultó difícil ganar. Hay poco de esto que lo acerque a los gobiernos con intervenciones fuertes en la distribución. El «dar» se concentró en el presupuesto estatal y los empleos públicos modestos, distribuidos ampliamente entre los amigos políticos²⁷.

En cambio, fue muy fuerte el componente faccioso de su política, que encontró amplia reciprocidad entre sus adversarios, al punto que el mundo político se escindió en «personalistas» y «antipersonalistas». La confrontación se desarrolló en el Congreso, en la prensa, en la calle, y especialmente en algunas provincias, como San Juan, donde debió competir con los Cantoni, que usaban sus mismas tácticas. Los antipersonalistas señalaron genéricamente la demagogia y la irrupción en la política de gente sin mérito, la «chusma de alpargatas». Esto refiere eventualmente al desarrollo del aparato partidario, que atrajo a mucha gente nueva —sin embargo mucho menos vinculada con la alpargata que los séquitos

²⁷ David Rock, *El radicalismo argentino (1890-1930)*, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.

de los políticos conservadores—, aunque en los primeros niveles, de acuerdo con el clásico y no contestado estudio de Ezequiel Gallo y Silvia Sigal, la extracción social de los dirigentes no cambió mucho²⁸. Los opositores pusieron sobre todo el acento en las violaciones a las instituciones, recurriendo al republicanismo y a la antigua figura del caudillismo. En su crítica había poca preocupación por el rumbo social, y mucha por el político, y particularmente por la contundente eficiencia electoral del yrigoyenismo.

En el período entre 1930 y 1943 hubo un cambio importante. Los gobernantes descartaron la posibilidad de derrotar a los radicales en elecciones libres, y recurrieron al fraude, sobre todo después del retorno radical a los comicios en 1935. Hubo democracia constitucional fraudulenta, lo que tiene mucho de oxímoron, pero no totalmente. Carentes de la llamada «legitimidad de origen», los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo se recostaron en el Ejército y en la Iglesia, dos instituciones de poder creciente, cuyos discursos estaban convergiendo en el nacionalismo católico y, en el segundo caso, con una novedosa capacidad de convocatoria en las calles. Estos apoyos se buscaron también entre diversos grupos empresarios —comenzando por los ganaderos— a partir de una fuerte intervención estatal en la regulación de la economía, que permitió superar la crisis e impulsar importantes acciones estatales nuevas. La política vial o la obra pública caracterizaron al gobierno nacional y a los provinciales, y sobre ella se iniciaron relaciones con los gremios, dirigidos por socialistas o comunistas. Sus políticos de base, los «caudillos conservadores», como Alberto Barceló —o los de origen radical como los Cantoni en San Juan— exploraron una versión tradicional y ampliada del «dar», repartiendo singularmente dinero y prebendas.

La política electoral estuvo en baja, pese al retorno del radicalismo a las elecciones en 1935. Pero el clima político resultó fuertemente estimulado por la polarización política e ideológica europea, iniciada con el advenimiento del nazismo en Alemania, que estalló en 1936 con la Guerra Civil Española. A semejanza de otros países europeos, se esbozó en la Argentina una suerte de Frente Popular, cuyos componentes se unieron por la causa republicana española: radicales, socialistas, comunistas, sindicatos e innumerables organizaciones de la sociedad civil que animaron un denso movimiento de solidaridad. En el lado de enfrente se formó un Frente Nacional, nutrido por las fuerzas políticas conservadoras y nacionalistas,

²⁸ Ezequiel Gallo (h) y Silvia Sigal, «La formación de los partidos políticos contemporáneos. La Unión Cívica Radical», en: *Desarrollo Económico*, vol. III, n° 1-2, 1963.

respaldado por el Ejército y por la Iglesia, quien junto con los nacionalistas pudo aportar una organización de base menor pero significativa.

La Guerra de España interesó mucho más que la política argentina, y se trató de definir sus equivalencias locales, sin éxito pues del lado del gobierno fraudulento nadie se aproximaba a una versión local de Hitler. La polarización se mantuvo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con algunos cambios. Mientras el gobierno de Castillo, cada vez más recostado en los militares, sostuvo la neutralidad, los comunistas desertaron del Frente Popular entre 1939-41 –una pérdida importante por su capacidad organizativa– y muchos conservadores o radicales reacios a los frentes populares se alinearon a un Frente Anti Fascista que se definió en primer término como partidario de los aliados y enemigo de un neutralismo que juzgaban pro alemán.

En 1943 hubo otro brusco cambio de escena: un grupo de oficiales jóvenes, neutralistas y más bien pro alemanes, tomó el poder y convocó a los cuadros del nacionalismo católico, enfrentándose con la totalidad del espectro político. En ese momento, la política local pudo finalmente ser interpretada por los frentes populistas en términos de democracia contra fascismo: el gobierno de Ramírez, en el que emergía Perón, hacía lo necesario para componer una figura asimilable con la de Hitler. El avance de los aliados en la guerra impulsó el crecimiento de este frente anti fascista y anti dictatorial, y el fin de la Guerra, a mediados de 1945, los convenció de que en la Argentina habría un final similar. Ese sentido tuvo la gran manifestación de setiembre de 1945, la Marcha de la Libertad. Pero sorpresivamente otra manifestación, el 17 de octubre, mostró un cuadro muy diferente, una gran transformación en las alianzas que se venía gestando, conducida por el coronel Perón, y que emergió inesperadamente ese día.

Desde 1943, Perón venía transformando las políticas estatales hacia el movimiento obrero, alentando su organización y estableciendo nuevos derechos. El gobierno militar sancionó la ley sindical, largamente demorada. Se consolidó así una alianza, de la que pocos dirigentes sindicales quedaron afuera, y el movimiento obrero, hasta entonces pilar del Frente Popular, se alineó con Perón. También hizo una convocatoria amplia a las fuerzas políticas, y consiguió seguidores en los distintos partidos –radicales, socialistas, conservadores–, entre los nacionalistas y los católicos y en menor medida entre los empresarios. Mantuvo el respaldo del Ejército y comprometió a la Iglesia. Sobre todo, habló del futuro, de las posibilidades del país en la posguerra y de los riesgos, y convocó al pueblo nacional para construir, todos juntos, la Nueva Argentina. Por primera vez, la interpelación

nacional y popular funcionó a pleno, empalideciendo la alternativa, igualmente progresista, de la Unión Democrática. Con la garantía del Estado, la democracia «real», popular y nacional, resultó más atractiva que la «formal», oligárquica y cosmopolita. El éxito discursivo de Perón consistió en imponer esa alternativa. La coronó cuando la torpeza del embajador norteamericano Braden le permitió asumir plenamente la bandera nacional y antiimperialista.

EL PERONISMO

Este resultado fue sorprendente desde el punto de vista político –nadie esperaba que el escenario cambiara tan radicalmente en poco tiempo, y que las alianzas se reorganizaran completamente– pero a la vez, visto en perspectiva, resume muchos de los rasgos que se han ido señalando sobre una sociedad en la que el proceso de nacionalización y democratización se desarrolló de una manera singular.

El peronismo en el gobierno profundizó las políticas de incorporación social y a la vez desarrolló el discurso que la legitimaba y que la convertía en una herramienta política. Diseñó el conocido mecanismo de salarios altos, protección a la industria orientada al mercado interno y ampliación del consumo. El gobierno financió lo que luego se llamó «la fiesta peronista» con recursos acumulados, y con la diferencia que el IAPI obtenía de las exportaciones agropecuarias. Cuando los recursos mermaron, modificó las políticas, controló los precios, reclamó aumentos en la productividad y hasta comenzó a apelar a las inversiones extranjeras, pero salvaguardó el empleo y los ingresos de los trabajadores sindicalizados. A la vez, generalizó un conjunto de nuevos derechos, incorporados además a la Constitución reformada en 1949, conformando y extendiendo lo que se llamó la ciudadanía social. Ésta se respaldó en políticas de salud, muy eficaces, de vivienda, de educación, de jubilaciones y de asistencia social, en las que la acción del Estado se complementó con otra, no fácil de definir, de la Fundación Eva Perón. Este ente se convirtió en la segunda mano de un Estado que dio, y mucho, mientras fue fácil, y aun cuando comenzó a ser difícil.

Estas políticas potenciaron la irrupción de los nuevos consumidores de bienes materiales, culturales y simbólicos. El peronismo le dio forma discursiva al proceso social que el Estado aceleraba. Eran los derechos del pueblo, que era a la vez la nación y el movimiento peronista: una suerte de Trinidad, que resolvía la pregunta por la identidad en los términos del nacionalismo popular de Estado, de probada eficacia

en otros contextos. Los conflictos culturales y sociales se explicaban por la lucha entre el pueblo y una oligarquía tenaz, que se negaba a ceder sus espacios, corporizada quizás en una señora que retaceaba a su empleada doméstica –el nombre remplazaba al tradicional de sirvienta– su derecho al descanso dominical o a la tarde libre.

La fórmula que contraponía al pueblo con los privilegiados –en el meollo mismo de la tradición populista– era adecuada para la política: los opositores, como el personaje «Mordisquito» creado por E.S. Discépolo, eran la oligarquía, vestida de conservadores, radicales o socialistas. El peronismo, movimiento y Estado, pudo avanzar por la senda de otros totalitarismos, adueñándose de las instituciones públicas, los espacios públicos, la palabra pública e incluso los medios de comunicación privados. Todas eran victorias sobre la oligarquía, cuya función discursiva y política era similar a la de la Contrarrevolución durante la Revolución Francesa.

Pero la fórmula pueblo/oligarquía tenía un límite: no servía para explicar los conflictos entre dos actores que reclamaban legítimamente su pertenencia al campo nacional: sindicatos y empresas de capital nacional. Explicar y manejar esto correspondió a otra dimensión del peronismo: un Estado que regulaba el funcionamiento de las corporaciones, que él mismo estimulaba. En el caso inicial, el de los sindicatos, la legislación colocó, junto a la legalización del sindicato único por rama de industria, el «reconocimiento gremial», otorgado discrecionalmente por el gobierno, que siempre podía quitarlo. El Estado intervino regulando conflictos y competencias, y actuó directamente, por ejemplo a través de grandes empresas de servicios o de entes, como el IAPI. Aquí el peronismo avanzó por un camino ya desbrozado y marcado desde los años treinta, cuyos modelos remiten al Estado fascista, que Perón conoció en Italia, a la «nación en armas» del Estado Mayor, al corporativismo propuesto por la Iglesia católica, o simplemente a lo que esbozaban los Estados europeos de la posguerra.

La identificación, real o formal, de cada uno de los actores con la «doctrina nacional», fundada en las «veinte verdades peronistas», y la convergencia de todas las demandas en el líder, conformó un ideal de Estado denominado Comunidad Organizada, una de las manifestaciones intelectuales más logradas del peronismo. No necesariamente era un programa práctico de acción. La serenidad de ese mundo, con el que Tomás de Aquino no se hubiera sentido a disgusto, contrastó con la virulencia de la lucha política y la concentración del poder en el líder, legitimado por el apoyo de las masas, tanto o más valioso en la Plaza que en los comicios. El líder sintetizaba el movimiento, el Estado y la Nación, e integraba el sereno manejo del Conductor con el apasionado verbo del caudillo popular, que a veces aconsejaba no salirse del camino entre la casa

y el trabajo y otras prometía repartir alambre de fardo para colgar oligarcas. Evita lo complementaba, y aportaba una mayor capacidad y convicción en la segunda dimensión. El aparato propagandístico del Estado los convirtió a ambos en una suerte de cuerpo místico. Nada faltó para que el peronismo llegara a ser una religión política.

Mucho de esto se interrumpió en 1955, cuando Perón perdió el poder, pero otro tanto, o más, quedó incorporado a la cultura política de los argentinos. El gobierno peronista pertenece a ese tipo de experiencias que deja una huella fuerte en los imaginarios. Tuvo una amplia vigencia hasta 1976—sobre esa tradición pudo volver al poder Perón en 1973—, y reapareció en 1983, en circunstancias muy diferentes, un poco desdibujado pero conservando algo de lo acuñado durante la experiencia inicial.

La unión o equivalencia entre algo llamado el pueblo y algo llamado el peronismo sigue siendo un dato fuerte, o al menos lo suficiente como para suscitar fuertes luchas por su apropiación, así como reacciones o temores. La idea de que un gobierno popular es aquel que da, que reparte beneficios materiales, parece ratificada en cada elección. La idea de que es función del Estado dirimir los conflictos corporativos, y que eso constituye el «buen gobierno», sobrevive alentada sobre todo por quienes, desde los negocios o la política, quieren aprovechar su control sobre el Estado para obtener beneficios extraordinarios. Finalmente, en una sociedad que ha dejado definitivamente de ser democrática e igualitaria, persiste el juicio adverso hacia cualquier grupo que aspire a dirigir la nación de acuerdo con un proyecto que vaya más allá de las contingencias inmediatas. Como suele decirse, la Argentina tiene elites dirigentes corporativas pero carece de una clase dirigente. Esto es otro tema. Llegado a este punto, me habría encantado discutir esto con Darío quien, en un medio profesional poco propenso a estas controversias, conservaba la pasión intelectual del historiador ciudadano.

Registro bibliográfico

ROMERO, LUIS ALBERTO

«Sociedad democrática y política nacional y popular: la Argentina en la primera mitad del siglo XX», en: ESTUDIOS SOCIALES, revista universitaria semestral, año XXIV, N° 46, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral, primer semestre, 2014, pp. 145-170.

Descriptores · Describers

sociedad / política / democracia / cultura política
/ peronismo
Society / Politics / Democracy / political culture
/ Peronismo